



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: Exp.: 05001 31 03 011 2012 00943 01

Magistrado Ponente: JOSE OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Proceso: Declarativo  
Demandante: CARLOS ARTURO MEJÍA AGUIRRE.  
Demandado: BANCOLOMBIA S.A..  
Extracto: De cara a obtener lo pretendido de cara a la reliquidación de la obligación, no se acreditó el incumplimiento de lo regulado en la Ley 546 de 1999 o de la doctrina dimanada de la Corte Constitucional, ni tampoco de las circulares expedidas por el Banco de la República. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Con fundamento en lo prescrito por el artículo 327 del C. G. del P., visto en armonía con el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, se procede a resolver por escrito el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia calendada el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín; previos:

ANTECEDENTES

DE LA DEMANDA

CARLOS ARTURO HENAO OSPINA y CECILIA GONZÁLEZ ZAPATA promovieron proceso declarativo en contra de BANCOLOMBIA S.A., cuyas pretensiones PRINCIPALES, fueron:

1. Que se declare que en el contrato de mutuo celebrado con la demandada, se aplicó la corrección monetaria asociada a intereses remuneratorios y capitalización ilegal de intereses, incurriéndose en el cobro y recibo de intereses de usura.
2. Como consecuencia de lo anterior se condene a la demandada reconocerle al demandante, las siguientes sumas:
  - Pago no tenido en cuenta, \$ 1'415.949,00.
  - Pagos en exceso, vía capitalización ilegal de intereses y errores en el manejo del crédito \$24'665.936,00.
  - Sanción contemplada en el artículo 72 de la ley 45 de 1990, por el cobro y recibo de intereses por encima del límite legal \$77'126.471,00.

De manera SUBSIDIARIA solicitó condenar a la demandada pagar a los demandantes la suma que resulte de reliquidar el crédito conforme a las normas legales vigentes.

Como sustento fáctico de lo anterior, se indicó que por la Escritura Pública número 85 del 16 de enero de 1998 corrida en la Notaría 11 de Medellín, los actores constituyeron hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de CONAVI (hoy BANCOLOMBIA S.A.), para garantizar el contrato de mutuo materializado en el pagaré N° 1661 320142950 (obligación 1099-142950), por valor de \$31'200.000,00, equivalente a 2.637,0661 UPAC, pagadero en 180 cuotas mensuales, a una tasa del 12% efectivo anual más la corrección monetaria.

Que en virtud de la ley 546 de 1999 a la obligación se le concedió un alivio por \$4'560.927,00.

Que en dicho crédito se capitalizó ilegalmente los saldos no cubiertos por concepto de intereses remuneratorios y corrección monetaria, entre el desembolso y el 31 de diciembre de 1999; y a partir del 1º de enero de 2000, se continuaron capitalizando ilegalmente los saldos no cubiertos por concepto de corrección monetaria.

Que BANCOLOMBIA S.A. no reestructuró el crédito del marras para cumplir los numerales 2º y 7º del artículo 17 de la ley 546 de 1999, en el entendido que tanto capital como el saldo de la deuda debían disminuir con el pago de cada cuota, desde la primera, sin que acreciente en términos reales, para lo cual se debía aumentar el plazo del crédito si era necesario. Por lo tanto, la cuota debía cubrir intereses, corrección monetaria, seguros y saldo de capital.

Que en el movimiento histórico del 16 de mayo de 2012, la demandada no relacionó el pago del 28 de junio de 2006 por valor de \$742.067,00, el cual sí consideró en la comunicación del 17 de abril de 2012; además, el alivio en esas comunicaciones también es diferente, \$4'659.425,66 frente a 4'625.950,93.

Que el efecto combinado de capitalizar ilegalmente intereses y cobrar corrección monetaria no autorizada asociada a intereses remuneratorios, condujo a la demandada a cobrar y recibir de intereses de usura.

Que la demandada manejó la corrección monetaria como interés, para liquidar los intereses de mora, y como capital para camuflar la capitalización ilegal de intereses durante la vigencia del crédito.

Que según dictamen pericial financiero, una vez realizada la reliquidación al 31 de marzo de 2012, existía un saldo a favor de los demandantes de \$101'792.407,00 más \$1'415.949 del valor actualizado de la cuota no tenida en cuenta el 28 de junio de 2006.

Mediante auto del 3 de mayo de 2019 se tuvo a CARLOS ARTURO HENAO OSPINA como sucesor procesal de CECILIA GONZÁLEZ ZAPATA, quien falleció el 3 de febrero de 2019 (folio 461 cuaderno principal).

#### CONTRADICCIÓN:

El demandado señaló como ciertos algunos de los hechos y dijo no constarle otros. Indicó que no existió error alguno en la reliquidación del crédito, la que cumplió todos los parámetros legales. Así propuso como excepciones de mérito las que denominó:

1. *“EL BANCO YA REALIZÓ LA RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. LA RELIQUIDACIÓN REALIZADA LLEVA IMPLÍCITA LA COMPENSACIÓN. NO HAY LUGAR A CALCULAR INTERESES SOBRE SUPUESTAS SUMAS COBRADAS EN EXCESO NI A REALIZAR RELIQUIDACIONES ADICIONALES.”*. Para lo que indicó que el Banco reliquidó el crédito conforme la ley 546 de 1999, la Circular externa 007 de 2000; y que los valores de la UVR para el periodo de la reliquidación fueron determinados mediante la Resolución 2896 de 1999 del Ministerio de Hacienda.

Así, que el valor del alivio fue de \$4'659.425,66, representando el 10,79% del saldo de la obligación al 31 de diciembre de 1999, el cual fue revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera, y tuvo como fin compensar las sumas pagadas en exceso, por lo que no hay lugar al reconocimiento de intereses sobre las mismas.

2. *“OBLIGATORIEDAD DE APLICAR LA LEY 546 DE 1999 Y LA CIRCULAR 007 DE 2000 DE LA SUPERINTENDENCIA*

*BANCARIA PARA LA RELIQUIDACIÓN.*”, argumentando que los actores desconocen que las únicas normas aplicables para la reliquidación son la ley 546 de 1999 y la Circular 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera), por ello el estudio que presentan carece de sustento jurídico.

Agregando que la Corte Constitucional en ninguna de las sentencias referidas al sistema UPAC estableció la metodología para reliquidar los créditos de vivienda, cuyo procedimiento solo se encuentra en la ley 546 de 1999 y en la Circular 007 de 2000.

3. *“ERRORES DEL ESTUDIO FINANCIERO PRESENTADO CON LA DEMANDA.*”, indicando que dicho estudio no tiene soporte jurídico, porque no cumple con lo establecido en la ley 546 de 1999, ni con al Circular 007 de 2000 mencionada, aunado que tal dictamen desconoce que la tasa de interés se debe aplicar al saldo en unidades y no en pesos, con lo cual el acreedor estaría recibiendo un menor valor al estipulado.

Entonces, el perito en la liquidación a partir del año 2000, dice erróneamente que la corrección monetaria no se debe capitalizar, porque en su criterio es tasa de interés, con lo que se desnaturaliza el crédito en UVR, pues no ajusta el capital por efectos de la inflación.

Que debe tenerse en cuenta que en esta clase de créditos, los intereses se aplican al saldo de capital en UVR, resultando unos réditos en esas unidades que se convierten a pesos por el valor de la UVR del día de pago.

4. *“LA CORRECCIÓN MONETARIA NO ES TASA DE INTERÉS*”. Arguyendo que el numeral 3° del artículo 121 del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señala los efectos de la corrección monetaria

como interés, lo que es distinto a afirmar que efectivamente lo sea, recalcando que no hay impedimento para cobrar intereses sobre el capital correccionado, lo que fue validado por la Corte Constitucional, y así se hace en la actualidad con los créditos de vivienda en UVR.

En esos términos, que es un error considerar ambos conceptos como excluyentes, por cuanto el objetivo de la corrección monetaria es mantener el poder adquisitivo del dinero, y el de los intereses es pagar el precio del dinero, por lo que la liquidación de crédito en UVR comprende dos etapas: una, la dirigida a actualizar el valor de la deuda en unidades (corrección monetaria); y, la segunda, calcular el valor de los intereses adeudados, lo que se debe hacer sobre el monto de la deuda indexado.

5. *“LA APLICACIÓN DE INTERÉS COMPUESTO NO IMPLICA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES”*, sosteniendo que no se puede afirmar que los sistemas de amortización que utilicen fórmulas matemáticas del interés compuesto, impliquen una capitalización. En algunos casos la amortización a capital es muy pequeña, pero siempre habrá abono a capital.
6. *“LEGALIDAD EN EL COBRO DE INTERESES”*, para lo que dijo que es la ley la que señala para qué efectos se toma la corrección monetaria como intereses, lo que es diferente a afirmar que efectivamente lo sea. Entonces, la corrección monetaria se debe sumar al interés estipulado, única y exclusivamente para determinar que el total resultante no sobrepase los límites trazados en el artículo 884 del C. de Co., para otros efectos no es interés.
7. *“INEXISTENCIA DE CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y DE ANATOCISMO”*. Para lo que afirmó que pese a que la capitalización de intereses en los planes de amortización de

créditos de vivienda estaba permitida para la época del contrato, en este préstamo no se presentó, por lo que los actores confunden los conceptos corrección monetaria e intereses remuneratorios.

8. *“INEXISTENCIA DEL PAGO DE LO NO DEBIDO POR PARTE DE LOS DEMANDANTES”*. Indicando que el pagaré 1661-320142950 carece de vicios en su expedición, ya que los pagos y la liquidación del crédito se ajustaron a la normatividad vigente sobre la materia.
9. *“INEXISTENCIA DE COBRO DE INTERESES EN EXCESO”*, para lo que arguyo que en ningún momento se aplicó una tasa de intereses superior a la pactada en el pagaré, ni se sobrepasaron los límites máximos establecidos por la Superintendencia Financiera.
10. *“OBLIGATORIEDAD DEL BANCO DE CUMPLIR LAS NORMAS DICTADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS”*. Ello en la medida que para los bancos era imposible aplicar o calcular una UPAC diferente a la certificada por el gobierno, por lo que el banco aplicó la normatividad que se encontraba vigente al momento de concederse el crédito.
11. *“EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA Y EL SISTEMA UPAC Y SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL BANCO”*, de lo que argumentó que la parte demandante se basa en sentencias que han expedido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre créditos de vivienda y sistema UPAC, pero en algunos casos le atribuyen efectos en el tiempo que no están acorde con lo establecido por esos Tribunales, asignando efectos retroactivos que expresamente se le han negado.

12. “*FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA*”, ello en cuanto el demandado siempre dio estricto cumplimiento a la normatividad que reguló los créditos de vivienda, las cuales estuvieron amparadas por presunción de legalidad; por tanto, la demanda debió dirigirse contra los órganos o entidades que promulgaron los distintos preceptos jurídicos bajo los cuales actuó la demandada.
13. “*CAUSAL DEL IMPEDIMENTO DEL PERITO. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA PRETENDIDA PRUEBA PERICIAL PRESENTADA CON LA DEMANDA.*”, para lo que debe considerarse que el perito PASCUAL JULIO HENAO OSPINA , es hermano del apoderado de la parte demandante.

#### DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Después de un breve recuento del extinto sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), su evolución y posterior sustitución por la UVR (Unidad de Valor Real), indicó que la ley 546 de 1999 ordenó que los créditos que fueron otorgados en UPAC y que estaban vigentes al 31 de diciembre de 1999, se expresarían en las nuevas UVR y debían re-liquidarse, lo que arrojaba un alivio que se tomaba como abono, buscándose reconocer el valor del dinero en el tiempo, y eliminar del capital todo componente distinto a la inflación.

Del caso en concreto señaló que se encuentra probada la existencia del crédito para vivienda en UPAC, la firma del pagaré, y la constitución de la hipoteca; y que el Banco realizó la reliquidación, aplicó el alivio, re-denominó el crédito en UVR, y que la obligación fue cancelada en el curso del proceso.



Que el objeto del proceso es determinar si la reliquidación efectuada por el banco adolece de los defectos señalados por el demandante, esto es, capitalización ilegal de intereses, cobro y recibo de corrección monetaria en los intereses remuneratorios, cobro y recibo de intereses de usura, y si existieron pagos en exceso, y si se deben devolver los dineros reclamados con intereses a la fecha del pago.

Que las obligaciones adquiridas por los demandantes fueron en UPAC, con sus variaciones, y los deudores aceptaron esa movilidad en las cuotas, que no dependían de las partes sino de los lineamientos trazados por el legislador y el Banco de la República.

Que en el proceso existen tres dictámenes periciales, uno el realizado por la Superintendencia Financiera, donde en dos de ellos se indica que el banco no incurrió en los errores endilgados en la demanda.

Que analizado el dictamen presentado por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, hay unos errores que saltan a la vista, desconociendo lo ordenado en la ley 546 de 1999 y desconoce la metodología de la Circular 07 de 2000, pese a que haya insistido que sí la tuvo en cuenta, ello por cuanto aplica tasa de interés al saldo en pesos y no al saldo en unidades, al igual que los pagos efectuados, con lo cual el banco recibiría un pago menor al realmente realizado, no ajusta el capital por efectos de la inflación a partir del 2000, pues dice que no capitaliza corrección monetaria ya que ella constituye intereses.

También dice que de tal experticia, los intereses los liquida sobre el capital en unidades, pero los convierte a pesos por el valor de la UVR del mes anterior, lo que equivale a liquidar intereses sobre el capital en pesos, pese a que se trata de un crédito que inicialmente fue otorgado en UPAC convertido a UVR.

Que en el mencionado dictamen se pretende que existan dos reliquidaciones, una a cargo del Estado y otra a cargo del banco, y liquida el crédito en pesos y no en UVR; indica que la corrección monetaria constituye intereses, y el valor de intereses en UVR lo multiplica por el valor de esas unidades al día del desembolso y no del día del pago, por ello se modificó indebidamente el crédito y sus movimientos, frente a saldos que no pueden tenerse como ciertos.

De lo anterior concluye parcialmente, que tal experticia no brinda credibilidad para tenerla como medio de convicción.

De otro lado, el *a quo* acoge la experticia realizada por la Superintendencia Financiera por ser objetiva e imparcial, además que fue realizada por un experto idóneo y está debidamente soportada, señalando que el banco re-liquidó debidamente sin capitalizar intereses, que no hay cantidades pagadas en exceso, el alivio fue debidamente liquidado, se descontaminó el crédito de la influencia negativa de la corrección monetaria con base en la tasa DTF, y en general que la liquidación y reliquidación fue conforme la ley, jurisprudencia y directivas existentes.

Así mismo, que en dicha experticia se consideraron los pagos según la fecha en que fueron realizados, el valor pagado y la conversión a UVR; y se verificó que la tasa de interés mensual aplicada fuese equivalente con la tasa pactada, y que la misma no excediera la tasa máxima legal autorizada.

Concluyó que la actora no demostró que la reliquidación efectuada por el Banco, hubiera ido en contravía de las disposiciones legales y administrativas existentes, ni que hubieren existido cobros en exceso o intereses de usura, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la parte demandante.

DE LA APELACIÓN (REPAROS Y ALEGATOS):

Se presentó frente a la decisión de primera instancia, como reparos los cuales fueron reforzados con los alegatos, los siguientes:

1. El perito asignado por la Superintendencia Financiera, no cumplió con el objeto del dictamen. La reliquidación del crédito debe hacerse conforme las normas legales vigentes y las sentencias de la Corte Constitucional, desde el desembolso del crédito hasta su cancelación por parte del demandante. Así, que la Superfinanciera omitió liquidar entre la fecha de desembolso y el 31 de diciembre 1999, que fue precisamente el período de tiempo en el cual el Banco re-liquidó el crédito, para los meros efectos de calcular el alivio por cuenta del Estado, que solo descontaminó el crédito del DTF.

Que así como le dio en la reliquidación un resultado diferente a la del banco, cabía la posibilidad que su saldo al 31 de diciembre de 1999 también fuera diferente; o sea, que no cumplió con la primera parte del dictamen que era liquidar el crédito, puesto que no hizo la liquidación entre el 16 de febrero de 1998 al 31 de diciembre de 1999.

Que tampoco verificó la reliquidación bancaria, puesto que la única que hizo esta entidad financiera fue calcular el alivio por cuenta del Estado entre el 16/02/98 y el 31/12/99, que fue precisamente el período que omitió liquidar el perito de la Superintendencia. Para emitir el concepto solicitado, había que re-liquidar a partir de la fecha de desembolso del crédito hasta el pago de la última cuota, y el perito no lo hizo.

2. El *a quo* confunde alivio con reliquidación, ya que lo pretendido es que se re-liquide el crédito para descontaminarlo de la capitalización ilegal de intereses

(remuneratorios y corrección monetaria), ello desde el desembolso hasta el 31/12/99; así como la capitalización ilegal de la corrección monetaria, la cual es interés, desde el 01/01/2000 hasta la cancelación del crédito; y en el evento en que la entidad financiera haya incurrido en el cobro y recibo de intereses en exceso, reconozca la sanción establecida en el artículo 72 de la ley 45 de 1990.

El hecho de que calculara el alivio, suponiendo que cumplió todos los requisitos, no significa que se pueda descartar, sin ningún tipo de análisis, que el banco haya realizado cobros en exceso, como se indica en el fallo.

El Estado asumió los perjuicios ocasionados por la vinculación del DTF al cálculo de la corrección monetaria para los créditos vigentes a diciembre 31 de 1999, pero no asumió los valores cobrados en exceso por las entidades financieras por concepto de la capitalización ilegal de intereses.

3. El *a quo* no analizó los dictámenes de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pues fueron tres los dictámenes que se presentaron, donde el último provino de un perito de la Superintendencia Financiera, que fue en el que se basó el fallo, quien tomó como cierto el cálculo del alivio hecho por el banco para descontaminar el crédito de los efectos del DTF en el cálculo de la UPAC y replicar la liquidación que hizo a partir del 01/01/2000, en la cual se presentó la capitalización ilegal de intereses, vía capitalización de la corrección monetaria no cubierta, durante toda la vida del crédito.

Del primer dictamen, concluye que no prospera la objeción por error grave, porque coincidió con el saldo del banco, sin analizar la objeción como tal. Del segundo, dice que tiene

errores que saltan a la vista, pero compartiendo lo dicho por el abogado de Bancolombia en los alegatos de conclusión, la lista de errores la obtiene de lo manifestado por dicho apoderado, sin tener en cuenta que las supuestas pifias fueron desvirtuados por el perito HENAO OSPINA en la aclaración y complementación de su dictamen.

4. Errores en el escrito de la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que el correspondiente perito al señalar que la capitalización de intereses en los créditos para vivienda, estuvo permitida hasta la expedición de la ley 546 de 1999, con lo desconoció:

- El numeral 1º artículo 121 del Decreto 0663 del 05/04/93 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –EOSF-).
- El Decreto 414 del 5 de marzo de 1.999 que contiene las reglamentaciones a las cuales se refiere el numeral primero del artículo 121 del EOSF.
- A pesar de manifestar que la capitalización de intereses estuvo permitida hasta la expedición de la ley 546 de 1999, lo hace a partir del 01/01/2003, por la vía de capitalizar los saldos no cubiertos por concepto de corrección monetaria, procedimiento que camufla tratando esta como capital, igual a como lo hace el banco.

El grave error aritmético que cometió el perito HERNÁN GUILLERMO TORRES SUESCÚN, al no tener en cuenta el pago que el 05/01/2000 hizo el usuario del crédito por \$457.900, produce una diferencia en contra de este por \$762.178,131 al 14/03/2000, que explica por sí sola el resultado de su dictamen a favor del banco por \$2.404.294,51 al 01/03/13.

5. Se desconoció el Decreto 414 del 5 de marzo de 1999, por medio del cual se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los establecimientos de crédito en la determinación de los diferentes sistemas de pago de créditos que utilicen en la financiación de largo plazo para vivienda, es clave para entender el soporte jurídico de la reliquidación del crédito efectuada por el perito PASCUAL JULIO HENAO OSPINA.

#### ALEGATOS DEL NO RECORRENTE:

Sobre la *“falta de prueba de errores en la reliquidación”*, que en ningún momento se demostró que la reliquidación realizada por el Banco tuviera algún error que no cumpliera con lo establecido por la ley 546 de 1999 o sentencias de las altas cortes sobre el tema, y el dictamen rendido por DIEGO LUIS CASTAÑO VASQUEZ, ratifica que la operación realizada por el Banco es correcta.

Contrario, el dictamen presentado por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA tiene como primer error que carece de todo soporte jurídico, pues este reconoció que lo realizó a su leal saber y entender, y no aplicó la ley 546/99 ni la circular 007/00 de la Superintendencia Bancaria, donde su pifia llega a re-liquidar en pesos y no en UVR, desconociendo que fue un crédito pactado en UPAC y re-liquidado en UVR según la ley 546/99; y peor, los intereses en UVR los multiplica por el valor de la UVR al día del desembolso y no del pago.

Que este experto no liquidó los intereses sobre el saldo capital en UVR, y muestra unos supuestos intereses de usura por considerar la corrección monetaria como tasa de interés. También le endilga que:

- Dice que descontamina el crédito de la capitalización de intereses, pero acepta que esta estuvo permitida hasta la expedición de la ley 546 de 1999.
- Afirma que la corrección monetaria es una tasa de interés, lo que es carente de todo soporte jurídico, va en contravía inclusive de la forma en la que actualmente se liquidan los créditos de vivienda en UVR, que permiten su actualización en pesos por efectos de la inflación.
- El perito aplica la tasa de interés sobre el saldo en pesos y no sobre el capital en unidades UVR.
- Existe error grave en cuanto a que los pagos los convierte a pesos por el valor de la UVR de la fecha de pago anterior, procedimiento que desnaturaliza el sistema de financiación de vivienda. puesto que no actualiza el saldo por la inflación.

Por el contrario, del dictamen de la Superintendencia Financiera, dice:

- Aplica la ley 546/99 para la reliquidación, la cual junto al alivio elimina el componente de la DTF de los créditos de vivienda.
- Reconoce que la Superfinanciera revisaba la reliquidación, y si la encontraba correcta, le informaba al Ministerio de Hacienda para que expidiera los títulos de tesorería TES.
- En este caso la reliquidación y alivio fue encontrado correcto según certificación que consta en el expediente y anexada como prueba con la contestación de la demanda.
- El plan de amortización aplicado por el banco a partir del año 2000, no contempla la capitalización de intereses.
- Concluye que no se cobraron tasas de interés superiores a las pactadas, mucho menos usura.
- Reconoce el dictamen que se trata de un crédito en UVR; aspecto importante destacar porque es al capital en UVR que se le aplica la tasa de interés y se obtienen unos intereses en

UVR que fueron aplicados de acuerdo con el orden de desglose.

- Concluye que el deudor al 1º de marzo de 2.013, le debe al banco la suma de 11.753,8894 UVR equivalentes a \$2'404.294,5,1 es decir, que mientras para el banco la obligación quedaba cancelada, según el dictamen todavía quedaba un saldo pendiente a favor del banco.

Afirman que no hay prueba del cobro en exceso de intereses o dinero, tampoco cobro de lo no debido, o de tasas de interés superiores a las pactadas, además que la únicas normas aplicables para la reliquidación son la ley 546 de 1999 y la circular 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera.

Así, agotado el trámite de instancia, se resolverá la alzada, previas;

## CONSIDERACIONES

### INTRODUCCION:

Los presupuestos procesales se encuentran reunidos y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno; así mismo, examinada la actuación procesal en ambas instancias, no se observa irregularidad que pueda invalidar lo actuado, por lo que están presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de segunda instancia.

En cuanto al problema jurídico a resolver, se centra en establecer: ¿la reliquidación en crédito de vivienda efectuada por la demandada, se ajusta a las normas legales y directrices establecidas para el efecto, o por el contrario, se incurrió en el cobro



y recibo de intereses de usura, y en general se cobraron sumas en exceso, que amerite sean devueltas a los demandantes?

## DE LA TRANSICIÓN DE LA UPAC A LA UVR, Y DE LA RELIQUIDACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES CRÉDITOS:

Los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, establecieron que los créditos de vivienda pactados en UPAC donde la tasa estuviera atada a la DTF y fueran vigentes al 31 de diciembre de 1999, deberían ajustarse a la UVR, donde la liquidación se haría conforme el Decreto 856 de 1999, comprendiéndose ello entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, aunado que también hubo un alivio en los saldos, tal como se desprende de tales artículos.

Para el efecto el artículo 41 en cita, indicó:

*“... 2. El establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de cada uno de los créditos, para cuyo efecto utilizará la UVR que para cada uno de los días comprendidos entre el 1o. de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la metodología establecida en el Decreto 856 de 1999.”*

Lo anterior implicaba que para “*reliquidar*”<sup>1</sup>, se trataba de una acreencia vigente a la que se le hacía un arreglo o conciliación, por lo que era menester que la obligación o crédito estuviera vigente al 31 de diciembre de 1999, lo que se satisface en el asunto que nos ocupa (además que ello no es motivo de disenso), por lo que era dable realizar la reliquidación deprecada.

Así, realizada la correspondiente conversión, se aplicaría un alivio para el deudor, eliminándose en todo caso el componente propio de la DTF, aunque hasta ese momento seguía vigente la capitalización

---

<sup>1</sup> El prefijo “*Re-*” que denota “*repetición*” y liquidar que en su segunda acepción significa según la RAE; “*Hacer el ajuste formal de una cuenta.*”

de intereses en tal tipo de créditos, pues ello solo fue proscrito con la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, insistiéndose que la reliquidación lo que eliminó fue el componente DTF.

Ahora, sobre lo pagado en desarrollo del contrato de mutuo con anterioridad a mayo de 1.999, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 24 de enero de 2011 (expediente 11001 3103 025 2001 00457 01), indicó;

*“... las cuotas o sumas canceladas antes de la sentencia de constitucionalidad (mayo de 1999), conservaban total validez; se mantenían intangibles y, solamente, resultaban afectadas las “nuevas” cuotas, tanto de los créditos anteriores como de los futuros... iv) En esa perspectiva, por disposición de la sentencia comentada, todo pago realizado antes de mayo de 1999, resultó válido, luego no es procedente pretender restitución alguna que derive de los aspectos fácticos y jurídicos valorados en esa determinación. Y como los efectos del referido fallo tienen categoría erga omnes, de suyo resulta, sin disquisiciones de ninguna índole, la obligación de todas las autoridades y particulares, incluyendo, desde luego, a las partes y sujetos de esta contienda judicial de acatarlas; en esa línea, no puede aspirarse a restituciones o decisiones que contraríen la sentencia objeto de comentarios. Por supuesto, tal afectación al materializarse con respecto al crédito mentado, ocurre al margen de las resoluciones citadas u otras más, cuyo fundamento jurídico estuviese vinculado a las disposiciones declaradas contrarias a la Constitución”.*

Junto a dicho precedente, la Corte Constitucional en la sentencia C-700 de 1999 declaró inconstitucional el sistema de financiación de vivienda mediante UPAC, teniendo como inexecutable *“en su totalidad los siguientes artículos del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), que estructuraban el sistema UPAC: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140.”*, providencia que en su numeral 4º resolutive, indicó;

*“Los efectos de esta Sentencia, en relación con la inejecución de las normas declaradas inconstitucionales, se difieren hasta el 20 de junio del año 2000, pero sin perjuicio de que, en forma inmediata, se dé estricto, completo e inmediato cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999, sobre la fijación y liquidación de los factores que inciden en el cálculo y cobro de las unidades de poder adquisitivo constante UPAC, tal como lo dispone su parte motiva, que es inseparable de la resolutive y, por tanto obligatoria.”.*

Lo anterior quiere decir que el sistema UPAC persistió hasta el 31 de diciembre de 1999, por lo que los efectos dentro de los negocios jurídicos celebrados bajo su imperio no perdieron sus efectos.

Por otro lado sobre la corrección monetaria y capitalización de intereses, la sentencia C-383 de 1999, señaló:

*“4.4. ..., conforme a la equidad ha de mantenerse el poder adquisitivo de la moneda, razón ésta por la cual pueden ser objeto de actualización en su valor real las obligaciones dinerarias para que el pago de las mismas se realice conforme a la corrección monetaria. “4.5. Es decir, la actualización a valor presente de las obligaciones dinerarias contraídas a largo plazo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, no vulnera por sí misma la Constitución. Con ello se mantiene el equilibrio entre acreedor y deudor, pues quien otorga el crédito no verá disminuido su valor, ni el adquirente de la vivienda y deudor hipotecario la cancelará en desmedro del poder adquisitivo de la moneda cuando se contrajo la obligación”.*

Igualmente en la sentencia C 747 de 1999, la misma Corporación precisó:

*“Como puede observarse, en cuanto hace al artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, los apartes demandados por la actora como inexecutable, lo son bajo la consideración de que ellos resultan contrarios a la Constitución en cuanto quebrantan el artículo 51 de la misma, pues el permitir la capitalización de intereses en créditos concedidos para la adquisición de vivienda a largo plazo, no pueden formar parte de un "sistema adecuado" para el efecto, e igualmente porque impiden que el deudor tenga una información veraz e imparcial sobre el monto real de las obligaciones a su cargo, razón ésta por la cual a dicho análisis se contrae el presente fallo.”*

Así, es claro que con la expedición de la ley 546 de 1999, se prohibió expresamente la capitalización de intereses en los créditos otorgados para la adquisición de vivienda, estableciendo en su artículo 17, que;

*“... las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar denominados exclusivamente en UVR”.*

Norma que en su numeral segundo establece como criterio general para este tipo de créditos:

*“Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva”*

Así mismo, mediante la sentencia C-955 de 2000, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de tal ley en cuanto a la creación del sistema UVR, considerando entre otras cosas, que:

*“A juicio de esta Corte, puede el legislador, sin violar la Carta Política, en una ley marco que regule el sistema de financiación de vivienda, contemplar una unidad de cuenta que refleje en las cantidades adeudadas el comportamiento del proceso inflacionario. Al hacerlo, define unas reglas de las cuales parten los contratantes en su relación jurídica y facilita que, por las características y el objeto de los créditos, se expresen los saldos todavía no pagados en términos reales para que sobre ellos, ya actualizados, se calcule el interés. Así, el capital prestado conserva su poder adquisitivo y la entidad prestamista no resulta castigada por el aumento de la inflación, medido con base en el índice de precios al consumidor. Ello es legítimo y, por tanto, la sola consagración de una norma que permita cuantificar el impacto de la depreciación monetaria no vulnera precepto alguno de la Constitución.*

*“... El artículo 3, al que se circunscribe este análisis, dice que las UVR habrán de reflejar el poder adquisitivo de la moneda ‘con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE’ (subraya la Corte), lo cual implica que la Junta Directiva del Banco de la República -que tendrá a su cargo el cálculo de la UVR a partir de esta Sentencia- no podrá considerar para el efecto factor alguno distinto. Sólo con ese sentido y alcance será declarada exequible la norma, ya que todo elemento o sistema extraño que haga crecer más la UVR que la inflación significaría cobrar al deudor lo que no debe por concepto del puro ajuste de los saldos a su cargo.*

*“... Es razonable cobrar simultáneamente corrección e interés sobre un préstamo de largo plazo si y sólo si dicha corrección refleja la pérdida en el poder adquisitivo y dicha tasa de interés es la tasa de interés real y no una tasa de interés inflada o manipulada”.*

Frente a este tema, la Superintendencia Financiera mediante el concepto 2009007370-004 del 8 de abril de 2009, señaló:

*“Conceptualmente una cosa es el capital prestado o saldo de la obligación y otra distinta el costo que se paga por su utilización el cual es determinado por las tasas de interés. El primero es susceptible de ser actualizado únicamente conforme a la corrección monetaria, entendida ésta como el ajuste que se hace a un capital por efecto de la inflación. La suma que se cobra por este concepto no representa una ganancia sobre el capital o un pago por su utilización sino el reconocimiento de la desvalorización monetaria. En tal medida, la corrección monetaria no corresponde al concepto de interés. El capital prestado para vivienda se debe ajustar única y exclusivamente de acuerdo con la inflación. La UVR*

*refleja exclusivamente el crecimiento de la inflación, pues ésta es medida de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, IPC. Para los intereses, entendidos como el costo por la utilización del capital, la tasa remuneratoria es la tasa real, esto es, la nominal descontada la inflación, como quiera que este último concepto ya fue incluido en el cálculo de la UVR en los créditos denominados en esta unidad. En los créditos de vivienda es legalmente válido cobrar simultáneamente corrección monetaria e interés remuneratorio. Así, los intereses serán calculados sobre los saldos insolutos de capital debidamente actualizados, sin que tal operación implique capitalización de intereses. Finalmente, frente a su apreciación acerca de la inflación, encontramos pertinente informar que para los créditos pactados en cualquier unidad de valor constante como el UPAC en su momento o la UVR en la actualidad, la corrección monetaria efectivamente debe sumarse a la tasa de interés para efectos de establecer los límites previstos en el artículo 884 del C. de Co.”.*

En ese sentido, se itera, actualmente está proscrita la capitalización de intereses en los créditos para adquisición de vivienda; no obstante, la corrección monetaria como compensación por la pérdida del valor adquisitivo del dinero es permitida como también lo es el cobro de intereses remuneratorios.

El problema que existía antes de promulgarse la aludida ley de financiación de vivienda individual a largo plazo, consistía en que la corrección monetaria se calculaba con la DTF, y precisamente eso fue lo que se corrigió con el alivio que se ordenara en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, pues al decir doctrinal;

*“... se descontaminó el crédito de la incidencia negativa que el cálculo de la corrección monetaria con base en la tasa DTF representó para él, mientras estuvo expresado en UPAC y sometido a las reglas de este sistema de crédito.”* (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia 24 de agosto de 2017. Rad. 20001-31-03-003-2007-00086).

La corrección monetaria y el interés son dos figuras complementarias con diferente naturaleza y proyección. El objetivo de la primera es garantizar la actualización del dinero en términos reales de manera que se mantenga su poder adquisitivo ante fenómenos como la inflación; este ajuste no produce renta ni utilidad, es simplemente la reposición del valor que pierde el dinero con el paso del tiempo. Por su parte el concepto de interés tiene como objetivo el obtener una utilidad o contraprestación por el uso del dinero.

Por lo anterior nada impide cobrar intereses sobre el capital corregido.

#### DEL CASO EN CONCRETO:

En el asunto en estudio está precisado que se efectuó la reliquidación del crédito, lo que se acreditó con la documentación anexa a la contestación de la demanda (folios 220-238 C. 1), utilizando para el efecto el monto de la obligación en UVR al 31 de diciembre de 1999, según la metodología prevista en el Decreto 856 de 1999, efectuando además los abonos a las obligaciones del valor de la diferencia que arrojará la liquidación de los créditos con base en esta nueva unidad, establecida según el índice de precios al consumidor.

El valor en pesos se ha dividido por el valor de la UVR correspondiente a cada pago.

Así, se certificó la aplicación del alivio por \$4'560.927,3524, mediante Resolución N° 590 del 23 de marzo de 2000, lo que se hizo conforme la ley 546 de 1999 y la Circular Externa 007 de 2000 de la Superintendencia Financiera, entidad que avaló dicho abono (fl. 217, archivo 01cuadernoppal; fl. 5 dictamen Superintendencia Financiera).

Valga reiterar frente a la mencionada reliquidación, que ella se tiene por efectuada según los documentos atrás referidos, donde se cumplieron los criterios establecidos en la ley 546 de 1999 y en la Circular 007 de 2000, sin que la Superintendencia Financiera la objetara de manera alguna, sino que por el contrario, la avaló; así como en el expediente no aparece prueba sobre que se hubiera incumplido alguna de las directrices trazadas por la jurisprudencia constitucional, el Banco de la República o la Ley.

A partir del 1º de enero de 2000 se continuó con la red denominación crediticia en UVR, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la ley 546, que expresó; “... *todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR*”, considerando que el préstamo no se había otorgado en pesos.

Téngase en cuenta que el Consejo de Estado en la Sala Plena de lo Contencioso administrativo, en sentencia del 12 de octubre del 2001, declaró la validez de la Resolución 14 del 3 de septiembre del 2000 dimanada del Banco de la República, y en sentencia del 1º de octubre del 2002 la misma Corporación encontró que la Resolución 2896 de 1999, estaba ajustada a la ley por no superar el IPC, y en sentencias del 27 de noviembre del 2002 y 27 de febrero de 2003, encontró legal la Circular 007 de enero 27 del 2000 y sus circulares complementarias, anulando tan sólo las Resoluciones 02 del 2001 y 085 del 2000; actos administrativos referidos todos a las reglas sobre liquidación de los créditos de vivienda, en desarrollo de las pautas indicadas por la ley 546 de 1999.

### **Valoración de las pericias arrimadas:**

El artículo 232 del C. G. del P., en cuanto a la apreciación del dictamen pericial, deja en claro que; “*El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.*”, norma que de similar talante estaba incorporada en el artículo 241 del C. de P. C.<sup>2</sup>, con lo que queda en claro que en el correspondiente

---

<sup>2</sup> El inciso 1º de aquella norma, vigente al momento de presentarse la demanda, indicaba; “*Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.*”.

análisis probatorio el juzgador ha de hacer un análisis crítico de la pericia.

En tales términos, se duele la recurrente que no se acogió la experticia realizada por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, que la *a quo* no la valoró adecuadamente, y por el contrario, acogió un dictamen que adolece de errores. Es decir, existe un reparo en relación a la valoración probatoria.

Dentro del proceso se recaudaron tres pericias. Dos de ellas señalan que la reliquidación efectuada por el banco para el reconocimiento del alivio, está acorde con la normatividad vigente para el efecto; y que el tratamiento dado al crédito a partir de la vigencia de la ley 456 de 1999, cumple con tal normatividad, sin que se haya evidenciado: capitalización de intereses, cobro de interés de usura, o pago de sumas en exceso.

Por el contrario, la experticia presentada por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA, quien era hermano del primer abogado que apoderó a la parte actora, refiere que los demandantes pagaron dineros en exceso dentro del crédito.

No obstante, la liquidación efectuada por este último perito, no tuvo en cuenta la corrección monetaria, tras considerar que ésta corresponde a interés, cuando como ya quedó por sentado, dichos conceptos tienen definiciones y objetos diferentes, siendo completamente válido aplicar ambos, tal y como lo reiteró la Superintendencia Financiera en concepto N° 2015070679-001 del 30 de julio de 2015, al señalar:

*“En esa medida es legalmente válido cobrar simultáneamente corrección monetaria e interés remuneratorio. Así, los intereses serán calculados sobre los saldos insolutos de capital debidamente actualizados”.*



Valga aclarar que es precisamente la actualización del capital lo que generaba que la cuota aumentara cada mes, y esa variabilidad era algo previsible en los términos contratados inicialmente.

Como ya se dijo, la corrección monetaria no debe confundirse con capitalización de intereses, pues se trata de dar solución a la pérdida del valor adquisitivo del dinero, como bien lo refiere el artículo 3º de la ley 546 de 1999, al indicar que la nueva unidad de cuenta debía reflejar el “*comportamiento del proceso inflacionario*”, frente a lo que la Corte Constitucional en la sentencia C 955 de 2000, indicó:

*“5. El cobro de intereses sobre la UVR. El numeral 2, objeto de consideración, manifiesta que la tasa de interés remuneratorio será “calculada sobre la UVR”. Esta parte de la disposición es exequible siempre y cuando se entienda que lo que debe ser objeto de actualización son los saldos insolutos, a medida que se paguen las cuotas por el deudor, amortizando en ellas desde el principio a capital, como en esta sentencia se prevé. Por otra parte, en las cuotas mensuales, si así lo quiere el deudor, se irá pagando la corrección por inflación a medida que se cause, evitando así que se lleve al capital”.*

Tal metodología que no se tiene en cuenta en el estudio practicado por HENAO OSPINA, el perito, pues así se constata en liquidación obrante del folio 484 al 558 y aclarada a folio 645 del cuaderno principal, que liquida siempre sobre el saldo inicial en pesos, incurriendo así en los siguientes yerros: 1) no re-denominó la obligación a UVR; 2) no tuvo en cuenta la corrección monetaria o actualización del capital para liquidar los intereses mensuales, tal y como lo permite la legislación; 3) Aplicó la tasa de intereses sobre el saldo en pesos cuando debe ser en UVR; y, 4) No toma el valor de la UVR para el día del pago sino para la fecha del desembolso.

Con todo ello, dicho experto desconoció los parámetros legales y reglamentarios ya referidos.

Ahora, en el primer dictamen presentado por DIEGO LUÍS CASTAÑO VASCO, se indicó:

*“El saldo final del capital en UVR (columna 24 del folio 57 de la reliquidación aportada por el Banco) siempre disminuye desde el pago de la primera cuota y en ninguna fecha posterior aumenta.*

*“Como las cuotas no siempre fueron pagadas mes a mes, se generaban intereses de mora que sumados a los intereses remuneratorios, la cuota correspondientes no alcanzaba a cubrirlos y por consiguiente no había amortización al saldo de capital (observar columna 23 del folio 57 en fechas 04-09-98, 13-11-98, 14-01-99) esos intereses no cubiertos se contabilizaron aparte (columna 25) pero el saldo de capital en UVR no aumentaba (analizar columna 24 en fechas 21-07-98 y 04-09-98, 18-09-98 y 13-11-98,) en consecuencia no se capitalizaron intereses.”*

Más adelante agregó:

*“De todo el análisis anterior se concluye que al 31-12-99 el saldo por capital de 361.697,2443 UVR y el saldo de intereses pendientes de pago por 2.250,7779 UVR se ajusta a los parámetros establecidos en las sentencias emitidas por la Corte constitucional, el Consejo de Estado y por la Ley 546/99.”*

Dijo el experto en cita, que la liquidación la efectuó sobre un capital en UVR, capital que siempre disminuyó desde el primer abono, y cuando la cuota no alcanzaba para abonar a capital el saldo continuaba constante; que no se capitalizó corrección monetaria. También refirió que si bien en el movimiento histórico aportado por el banco del 28 de junio de 2006 no aparece el pago por \$742.067,00, el mismo sí fue aplicado el 27/06/2006.

Siendo coincidente con lo hasta ahora expuesto, indicó que la corrección monetaria no es interés sino que es un mecanismo para corregir la inflación.

Por su parte el perito designado por la Superintendencia Financiera de Colombia, señaló:

*“[r]esulta importante precisar que la capitalización de intereses en los créditos para la financiación de vivienda estuvo permitida hasta la expedición de la Ley 546 de 1999 y no debió ser considerada dentro del proceso de reliquidación antes aludido”*

Adicionó que;

*“... [e]sta Superintendencia verificó en todos los casos, que el proceso de sustitución de UPAC por UVR se efectuó dentro del contexto económico establecido en las normas citadas a lo largo del presente documento, con el fin de asegurar que el resultado, es decir, que el monto del alivio efectivamente correspondiera a lo ordenado en la ley.”.*

En esos términos expuso que en sus archivos reposa el procedimiento efectuado por LA CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI respecto al crédito del señor CARLOS ARTURO MEJÍZ AGUIRRE, verificándose un alivio por \$4'560.927,35, manifestando por último que al compararse la tasa efectiva anual equivalente con la de usura, en ningún mes se observa que la primera sea mayor o igual a la segunda.

Así, que efectuó la liquidación donde se aplicaron la totalidad de pagos en UVR realizados por los deudores, siendo ese el sistema de amortización pactado; verificándose que la tasa de interés mensual aplicada fuera equivalente con la de interés anual pactada, y que se ajustara a la máxima legal autorizada para la fecha de desembolso y durante la vida del crédito; y producto de esa liquidación se obtuvo un saldo a favor de BANCOLOMBIA de \$2'404.294,50..

Dicho lo anterior, para la Sala resultan claros, convincentes, plenamente estructurados y fundamentados en la normatividad vigente, los dictámenes presentados por los peritos DIEGO LUÍS CASTAÑO VASCO y HERNÁN GUILLERMO TORO SUESCÚN, y en ese sentido logran el convencimiento jurisdiccional para ser soporte de la decisión. En ellos se explica de forma detallada el procedimiento realizado para la reliquidación y el reconocimiento del alivio, así como para la liquidación del crédito a partir de la entrada en vigencia de la ley 546 de 1999.

El experticio allegado por PASCUAL JULIO HENAO OSPINA presenta las fallas ya referidas, evidenciando errada aplicación de las normas pertinentes, lo que desdice de la “solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos”, por lo que

indefectiblemente, ello no puede ser considerado como prueba para decidir.

### **Conclusión:**

El actor no demostró que la demandada hubiera incumplido con alguna de las directrices trazadas por la Ley 546 de 1999, las sentencias que sobre el tema emitió la Corte Constitucional, o las circulares expedidas por el Banco de la República, y en ese sentido el fallo recurrido habrá de ser confirmado.

Debe recordarse para el efecto el principio de carga de la prueba según el cual *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”*, o como recientemente lo ha precisado la doctrina;

*“... en palabras de Devis Echandía<sup>3</sup>, (...) La necesidad de la prueba en un sentido general, para cada proceso, contempla los hechos que deben probarse en él, sin individualizar quien debe suministrarla, por lo cual el concepto se identifica con el tema de prueba; pero otra cosa es esa situación personal de cada parte frente a los hechos que es necesario probar, para que el juez disponga del presupuesto contemplado en las normas jurídicas que puede aplicar en su favor, y a ella corresponde la noción de carga de la prueba, que regula la hipótesis en que falte la prueba que ha debido ser suministrada; es un sucedáneo de la prueba, que le dice al juez como debe fallar cuando no se aporta esta, y, por tanto, determina indirectamente lo que cada parte tiene interés en que se pruebe para no salir perjudicada, al recurrir el juez a tal remedio supletorio.”* Cita y cursiva dentro del texto. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC4490-2019. 22 octubre de 2019.

En cuanto a costas en segunda instancia, serán a cargo del recurrente y en favor de la demandada, tal como se deriva del artículo 365 del C. G. del P., fijándose como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente al momento de su liquidación.

---

<sup>3</sup> Op. cit. pág. 136

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

### RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, según lo motivado.

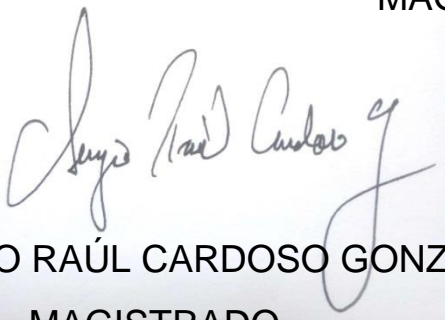
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, donde en lo que a esta instancia corresponde y como agencias en derecho, se fija el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente en favor de la parte demandada.

En firme ésta providencia vuelva el expediente al Despacho de origen.

Esta decisión se notifica en estados.



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
MAGISTRADO



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ  
MAGISTRADO